



## DISCURSO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES DRA. MÓNICA XAVIER EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

**LUNES 09 de marzo 2026 – Evento central del gobierno – Torre Ejecutiva**

Agradezco la presencia del Señor Presidente de la República profesor Yamandú Orsi, señora Vice Presidenta de la República ingeniera Carolina Cosse, Señor Ministro de Desarrollo Social profesor Gonzalo Civila, Señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Economista Rodrigo Arim. Quiero agradecer también la presencia de las autoridades que nos acompañan: Ministras, Ministros, legisladoras y legisladores. Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia y demás autoridades de los distintos organismos del Estado, a los integrantes de los 3 Consejos (Género, Violencia, Trata) Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país, representantes de organismos internacionales.

Quiero agradecer también a las representantes de organizaciones de la sociedad civil de mujeres y feministas, de la academia, a las ex Directoras del Instituto Nacional de las Mujeres, a las trabajadoras y trabajadores del Instituto, y a la prensa aquí presente. Es un gusto para mí saludarles y compartir este acto, en este día tan especial donde conmemoramos un nuevo 8 de marzo, Día internacional de las mujeres con la consigna que mantendremos durante el quinquenio: **“Cuando todas las mujeres avanzan, la sociedad avanza”**. **“Igualdad de género, compromiso de Estado”**.

Estamos conmemorando un nuevo 8 de marzo, en un contexto político global muy distinto al del año pasado. En estos primeros meses del 2026, estamos asistiendo, con angustia y preocupación, a un orden internacional profundamente desestabilizado. Viendo cómo, los principios básicos del derecho internacional -la soberanía de los Estados, la prohibición del uso de la fuerza y el multilateralismo- están siendo sistemáticamente ignorados y socavados. Estamos frente a una crisis que ha hecho “estallar el orden internacional” tal como lo conocíamos, retornando a un escenario más cercano al mundo de principios del siglo XX, donde las reglas y límites del derecho internacional pierden peso frente a la ley del más fuerte. Esto no solo vulnera la soberanía de los Estados, sino que pone en cuestión los pilares mismos



del sistema multilateral que surgió tras la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, varios genocidios continúan, con enormes pérdidas humanas, sin poder las instituciones multilaterales garantizar un alto al fuego o detener la devastación. Frente a esta situación, no podemos tampoco dejar de mencionar, que las guerras y los conflictos armados profundizan las desigualdades y afectan de manera desproporcionada a las mujeres, niñas y comunidades más vulneradas. Nos sumamos a las voces que desde diversas partes del mundo, como las de nuestro gobierno, están pidiendo diálogo, alto al fuego y respeto a los derechos humanos.

El 8 de marzo constituye una instancia clave para la movilización ciudadana en las calles y para la reafirmación del compromiso del Estado uruguayo con la igualdad sustantiva de género, así como para la rendición de cuentas y la proyección de prioridades de política pública. Para este año, el Instituto Nacional de las Mujeres, en su rol rector de las políticas de igualdad de género, propone situar el eje político en la **autonomía económica de las mujeres en toda su diversidad**, entendida como una dimensión estructural e indisociable del ejercicio pleno de derechos.

Este enfoque se inscribe en los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país en materia de igualdad y no discriminación, y convoca de manera directa a las instituciones que integran el Consejo Nacional de Género, en tanto ámbito estratégico de coordinación, corresponsabilidad y transversalización de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas públicas.

Desde el enfoque conceptual adoptado por Inmujeres, emanado de los acuerdos en el marco de las Conferencias Regionales de la Mujer de América Latina y el Caribe liderados por la CEPAL, **la autonomía económica de las mujeres se define como la capacidad de generar ingresos y recursos propios, controlar su uso y tomar decisiones económicas relevantes, en condiciones de igualdad con los varones**. Esta definición excede la mera participación en el mercado laboral y remite a un proceso multidimensional, condicionado por factores estructurales, institucionales y culturales.



La autonomía económica involucra, entre otros aspectos: i) el acceso, permanencia y progresión en el empleo remunerado; ii) la calidad del empleo, los ingresos y la protección social asociada; iii) la distribución del tiempo entre trabajo remunerado y no remunerado; iv) el acceso a formación estratégica y a sectores dinámicos de la economía; v) la capacidad efectiva en la toma de decisiones.

En este sentido, la autonomía económica no puede analizarse de forma aislada, sino en estrecha relación con la división sexual del trabajo, la organización social de los cuidados y los estereotipos de género que continúan estructurando trayectorias educativas y laborales diferenciadas.

La evidencia empírica disponible confirma que las mujeres enfrentan **desventajas sistemáticas en su inserción y desempeño en el mercado de trabajo**. De acuerdo con datos recientes elaborados por Inmujeres en base a la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, en 2024, las mujeres presentaron una tasa de actividad y de empleo significativamente menor que la de los varones, así como una tasa de desempleo más elevada.

Estas brechas no se distribuyen de manera homogénea. La presencia de hijas e hijos en el hogar impacta de forma directa y diferencial sobre el empleo femenino, reduciendo sus tasas de ocupación, mientras que no genera variaciones sustantivas en el empleo masculino. Este patrón evidencia que la maternidad continúa operando como un **factor estructural de penalización laboral**, vinculado a la asignación desigual de las responsabilidades de cuidado. En este punto es importante mencionar que, a partir de enero de 2026, comenzó a regir en nuestro país, la ampliación de la licencia por paternidad a 20 días corridos para trabajadores de la actividad privada y funcionarios públicos de la Administración central. Esta iniciativa es sin duda una ampliación en derechos para los varones en la corresponsabilidad en el hogar y también es un avance en términos de igualdad de género para toda la sociedad.

Asimismo, las mujeres se concentran mayoritariamente en ramas de actividad feminizadas -como la enseñanza, los servicios sociales y de salud, y el trabajo doméstico- que suelen



presentar **menores niveles de remuneración y reconocimiento económico**, al tiempo que permanecen subrepresentadas en sectores estratégicos y mejor remunerados de la economía.

La brecha salarial es una de las expresiones de la desigualdad económica de género. En 2024, las mujeres percibieron un ingreso horario levemente inferior al de los varones; sin embargo, al considerar el ingreso total, la brecha se amplía de manera sustantiva.

Este fenómeno pone de manifiesto que la desigualdad no se explica exclusivamente por diferencias salariales directas, sino por un conjunto de **mecanismos estructurales que operan de forma acumulativa**, entre los que se destacan: i) mayor inserción femenina en empleos de tiempo parcial; ii) trayectorias laborales interrumpidas o discontinuas; iii) mayor proporción de mujeres que atraviesan situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral iv) segregación ocupacional horizontal y vertical v) menor acceso a cargos jerárquicos y a niveles salariales altos. La brecha salarial no solo impacta en el presente, sino que genera efectos de largo plazo sobre la **seguridad económica de las mujeres**, incidiendo en el acceso a la protección social, las jubilaciones y la capacidad de enfrentar situaciones de vulnerabilidad económica.

El análisis de la autonomía económica resulta incompleto sin considerar la distribución del trabajo no remunerado. Las Encuestas de Uso del Tiempo evidencian que las mujeres continúan asumiendo una **sobrecarga significativa de tareas domésticas y de cuidados**, dedicando en promedio muchas más horas semanales que los varones a este tipo de trabajo. Esta desigual distribución del tiempo limita de manera directa las posibilidades de inserción laboral, formación continua y desarrollo profesional de las mujeres. A su vez, pone de relieve la contribución económica no reconocida que realizamos al bienestar social y a la reproducción del sistema productivo. La persistencia de este patrón confirma que **no es posible avanzar hacia la igualdad en el mercado de trabajo sin políticas activas de corresponsabilidad social y de género en los cuidados**, que involucren al Estado, al mercado, a las comunidades y a los hogares. Por ello la incorporación de cláusulas de género y de cuidados en la ronda de negociación colectiva constituye un avance en el que debemos persistir.

La ciencia y en particular las áreas de tecnología, ingeniería y matemáticas (llamadas áreas STEM, por su sigla en inglés) presentan especial relevancia desde la perspectiva de la



autonomía económica. Actualmente, la participación femenina en estas áreas es marcadamente inferior a la masculina, tanto en la formación como en el empleo.

No obstante, la evidencia muestra que las personas formadas en STEM presentan **mejores indicadores laborales**, incluyendo mayores tasas de empleo, menores niveles de desempleo y brechas salariales más reducidas en comparación con el promedio del mercado laboral. Esto posiciona a las STEM como una **palanca estratégica para la reducción de desigualdades económicas de género**. La baja participación de mujeres y niñas en estas áreas no responde a déficits de capacidades individuales, sino a la persistencia de estereotipos de género, sesgos en los sistemas educativos y barreras culturales e institucionales que condicionan las elecciones formativas desde edades tempranas. Por ello cuando se incorporan mujeres en estas áreas también supone un **aporte a la transformación cultural**. Continuar promoviendo la participación femenina en STEM -que implica, una intervención deliberada sobre el sistema educativo, la orientación vocacional, la formación docente y la articulación con los sectores productivos y de innovación- supone persistir y profundizar esa dimensión estratégica.

El diagnóstico presentado confirma que las desigualdades económicas de género no se corrigen de manera espontánea. Por el contrario, tienden a reproducirse y profundizarse si no son abordadas mediante políticas públicas integrales, sostenidas y articuladas.

Avanzar en la autonomía económica de las mujeres requiere: i) medidas orientadas a reducir la brecha salarial y promover la equidad retributiva; ii) Políticas de corresponsabilidad y fortalecimiento del sistema de cuidados; iii) Políticas de prevención de la violencia y el acoso laboral iv) Acciones afirmativas para ampliar la participación de mujeres y niñas en STEM; v) Producción, uso y análisis sistemático de datos de género para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas; vi) Coordinación efectiva entre los distintos organismos del Estado, en el marco del Consejo Nacional de Género.

A **continuación rendiremos cuentas de los 90 compromisos iniciales** anunciados por el gobierno en marzo de 2025 para el primer año de gestión. En esta rendición presentaremos los avances en distintas áreas, entre ellas, las medidas referidas a la autonomía económica de las mujeres. Es importante señalar a la ciudadanía que, además de las 90 medidas comprometidas en el pasado 8 de marzo -sobre las cuales hoy rendiremos cuentas-, el gobierno ha impulsado



un conjunto más amplio de acciones y políticas que profundizan esta agenda, algunas de las cuales ya fueron mencionadas en el reciente discurso del Presidente de la República. Como son: i) la priorización de mujeres titulares de hogares monomarentales en el otorgamiento de hectáreas del instituto nacional de colonización ii) la creación de 19 mil empleos para mujeres en un total de 26 mil nuevos empleos iii) la creación del dispositivo Elida 360 al cual luego nos referiremos, e incremento de la cantidad de tobilleras iv) el otorgamiento de la canasta higiénica menstrual a destinatarias de la TUS entre otros.

En este primer año de gestión, desde el Instituto Nacional de las Mujeres reconocemos el avance sostenido que desde todo el Estado se ha realizado para superar situaciones de desigualdad y discriminación que las mujeres, niñas y adolescentes enfrentan día a día.

Desde el Estado, hemos ido coordinando estos esfuerzos en el marco del trabajo articulado en los tres espacios interinstitucionales que Inmujeres preside: el Consejo Nacional de Género, el Consejo Nacional Consultivo por una vida libre de violencia basada en género y el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de personas. Estos tres ámbitos cuentan con una gran representación de instituciones estatales y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil en su diversidad, conforme a lo estipulado por ley.

Desde esta nueva administración de gobierno consideramos imprescindible la participación de las organizaciones de mujeres y feministas en todo el ciclo de la política y hemos hecho los máximos esfuerzos, a nuestro alcance, para garantizar su presencia.

Es una prioridad de esta gestión que la coordinación en estos espacios redunde en mejoras medibles y tangibles en la vida diaria de todas las mujeres, motivo por el cual se está en proceso de construcción de tres instrumentos que serán centrales para las políticas públicas para la igualdad: el Plan Nacional de Género 2025-2030, el III Plan Nacional por una Vida libre de VBG hacia las mujeres y el Plan Nacional de combate a la Trata y la Explotación de personas.

No queremos dejar de mencionar aquí el apoyo fundamental que nos han dado las distintas agencias de Naciones Unidas, Agencia Española de Cooperación Internacional para el



Desarrollo y el BID para que el Estado pueda avanzar en los propósitos de la igualdad.

**A continuación, se presenta un resumen de la rendición de las 90 medidas iniciales comprometidas por los Incisos de la Administración Central.**

La información se presenta consolidada en 6 grandes ejes temáticos, en los cuales hemos agrupado las medidas comprometidas: 1) Consolidación del Sistema Nacional de Género (referido al fortalecimiento de la arquitectura de género, los sistemas de información, la gobernanza multinivel y el diseño e implementación de Planes Sectoriales); 2) Transformación cultural, educación inclusiva y participación plena de las mujeres en todos los ámbitos; 3) Políticas públicas orientadas a la autonomía económica de las mujeres con énfasis en la reorganización social del cuidado; 4) Vida libre de violencia basada en género hacia las mujeres; 5) Acceso universal a servicios de salud integral y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres; 6) Contextos críticos.

Las medidas comprometidas en los primeros días de asumido este gobierno se tradujeron en 139 acciones concretas.

En estas 139 acciones, distribuidas en los **6 grandes ejes mencionados, se observa, que el 82% de las acciones están en proceso o ya fueron cumplidas** (61,2% y 21,6% respectivamente), quedando por iniciar menos del 16% de las acciones comprometidas.

## **Medidas por Ejes**

### **EJE 1: Consolidación del Sistema Nacional de Género**

Dentro de este eje se han comprometido acciones orientadas a:

- Construir y fortalecer la arquitectura interinstitucional de género y las capacidades estatales necesarias para desarrollar políticas públicas para la igualdad.
- Consolidar sistemas de información de género que permitan contar con indicadores para medir el grado de compromiso con los derechos humanos de las mujeres.
- Promover una gobernanza multinivel para que las políticas de género se desarrollen de manera integral, coordinada, con pertinencia territorial y participación social.





En cuanto a la consolidación del Sistema de Género, existen 47 acciones comprometidas. De ellas, **68% están siendo implementadas actualmente**, y más de 10% ya fueron cumplidas, quedando por iniciar un 17%.

En este eje se destacan las acciones de creación y fortalecimiento de Unidades Especializadas en Género (UEG), con asignación de funcionariado, presupuesto y estructura en diferentes Ministerios.

Se desarrollaron diversas modalidades de sensibilizaciones y capacitaciones, acompañando también la construcción de protocolos de actuación frente situaciones de discriminación por razones de género en el ámbito laboral.

Asimismo, se ha avanzado en la construcción de Planes Nacionales en ámbitos sectoriales que incorporan como eje transversal al género: Política de género Agro con su Plan de acción 2025-2030, el Plan Nacional de Cuidados 2026-2030 y el Plan estratégico 2025-2030 del MRREE. Se encuentran actualmente en proceso de construcción: el Plan Nacional de Género y Cambio Climático, el Plan Nacional de Educación Sexual Integral, la Estrategia Nacional para eliminar el embarazo en niñas y prevenir el embarazo en adolescentes para el período 2025-2030, el Plan Nacional de Drogas, el Plan Nacional de derechos sexuales y reproductivos, la Estrategia Nacional de Salud Mental y Bienestar 2025–2030 y el Plan Nacional de Industria, entre otros.

Este conjunto de instrumentos da cuenta de un Estado que avanza en la incorporación transversal de la igualdad de género en sus políticas públicas, consolidando una agenda estratégica que reconoce que el desarrollo sostenible, la justicia social y la democracia requieren necesariamente de la plena garantía de los derechos de las mujeres.

El diseño de sistemas de monitoreo y evaluación, que puedan dar cuenta del avance de las políticas y de las oportunidades de mejoras necesarias para construir sociedades más igualitarias, es otro de los avances que se han desarrollado en este eje, presentándose como un desafío que todos los organismos de la administración central han asumido y puesto en marcha en estos meses de gestión.





## EJE 2: Transformación cultural, educación inclusiva y participación plena de las mujeres en todos los ámbitos

Dentro de este eje se han comprometido acciones orientadas a:

- El trabajo interinstitucional y con la sociedad civil hacia una cultura igualitaria y una educación no sexista.
- Promover cambios en los roles y estereotipos de género que limitan las oportunidades y las trayectorias de las mujeres, con especial énfasis en la deconstrucción de masculinidades hegemónicas.
- Fortalecer las competencias en STEM de las mujeres, niñas y adolescentes, potenciando su futura inserción en sectores tecnológicos, eliminando así estereotipos, disminuyendo brechas persistentes y previniendo situaciones de violencia digital.
- Mejorar la representatividad política y social de las mujeres, especialmente de las que tienen menor acceso a cargos y espacios de poder aumentando sus niveles de incidencia en la toma de decisiones.

Si observamos la cantidad de acciones y su avance, un tercio ya fueron cumplidas, mientras que dos tercios aproximadamente están en proceso de implementación. Es decir que **si agrupamos aquellas que ya fueron comenzadas y/o cumplidas, este porcentaje asciende a casi un 96%** destacándose el compromiso de los organismos de la Administración Central con la transformación cultural, la cultura inclusiva y la participación plena de las mujeres.

Los organismos han desarrollado acciones que buscan de manera central fortalecer el liderazgo de las mujeres en sus espacios y la participación en la construcción de políticas públicas. Asimismo, se han desarrollado campañas públicas de visibilización de mujeres en espacios no tradicionales y se han diseñado e implementado interinstitucionalmente la construcción de cursos multiplataformas de Formación para la igualdad.

### PPT 6



### **EJE 3: Políticas públicas orientadas a la autonomía económica de las mujeres con énfasis en la reorganización social del cuidado**

Dentro de este eje se han comprometido acciones orientadas a:

- La reducción de brechas de desigualdad de género en términos de generación de trabajo digno y acceso a recursos económicos y productivos.
- Estrategias de formación profesional, capacitación, certificación de competencias que permitan anticiparse a los cambios tecnológicos, ambientales y demográficos, en clave de ingreso al mercado de trabajo de las mujeres.
- La articulación de instrumentos de corresponsabilidad social y de género en los cuidados que den soporte a la estrategia hacia la autonomía económica de las mujeres.

En este eje, **más de 7 de cada 10 acciones están en proceso de implementación**. Si se agrupan aquellas acciones iniciadas con las que ya fueron cumplidas, el **grado de adherencia a la concreción de las acciones comprometidas para este eje es de un 89%**. Quedando por iniciar un 10%.

En las acciones rendidas por los organismos se evidencia la priorización para el otorgamiento de cupos a mujeres en diversos programas que garantizan el acceso al mercado laboral. Además se ha dinamizado la inserción laboral de las mujeres mediante servicios de orientación e intermediación laboral con enfoque de género y alianzas estratégicas con cámaras industriales y comerciales para fomentar el empleo promovido.

Destaca también el impulso a cláusulas de corresponsabilidad en la negociación colectiva, la expansión del Sistema Nacional de Cuidados y la profesionalización del sector de los cuidados.

Se registra una profundización de líneas de créditos con perspectiva de género en el agro y capacitación dirigida a emprendimientos turísticos liderados por mujeres, así como fondos específicos a mujeres que lideran MIPYMES con proyectos enfocados en el crecimiento, la consolidación y la competitividad de sus empresas.



#### **EJE 4: Vida libre de violencia basada en género hacia las mujeres**

En este eje se ha avanzado desde toda la interinstitucionalidad estatal para prevenir las situaciones de violencia basada en género hacia las mujeres en todos los ámbitos, ampliando la atención y oportunidades de salida de esta situación.

Para este eje se destaca que entre las acciones en proceso y las cumplidas tenemos un avance del 79%, quedando sin iniciar un 21% de las acciones comprometidas. Además, no podemos dejar de mencionar que, en este eje, hay acciones muy importantes que no fueron parte de los compromisos expresados en las primeras 90 medidas y que ya se están implementando como la referida a la creación del Dispositivo Elida 360, sobre la incorporación de 2.000 dispositivos móviles gratuitos para la protección de las víctimas de violencia basada en género.

En la rendición de acciones, se destaca la ampliación de cupos para la atención de mujeres en situación de violencia basada en género y trata, y la priorización de esta población en programas transversales (por ejemplo, para el acceso a oportunidades laborales, mejoramiento de condiciones habitacionales, adjudicación de asistentes personales, entre otras). Se han implementado además mejoras edilicias, capacitaciones y nuevos protocolos de procedimiento para equipos de todos los incisos, tendientes a seguir mejorando la atención y la respuesta a las situaciones de violencia basada en género que afectan a mujeres, adolescentes y niñas.

Asimismo, se han desarrollado acciones tendientes a sensibilizar y prevenir estas situaciones a través del diseño e implementación de campañas públicas dirigidas a diversos públicos.

#### **EJE 5: Acceso universal a servicios de salud integral y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres**

Dentro de este eje se han comprometido acciones orientadas a:

- Avanzar hacia un sistema de atención de salud centrado en las necesidades de salud de las mujeres por ciclo de vida (niñas, adolescentes, mujeres adultas y mujeres mayores).
- Fortalecer las políticas nacionales referidas a salud sexual y salud reproductiva y el respeto al marco legal vigente como parte de la atención integral de la salud de las



mujeres.

Para este eje, un 37,5% de las acciones está en proceso de implementación mientras que un 25% ya fueron cumplidas. Quedando sin iniciar un 37,5%.

Los avances registrados en este eje toman en consideración la reactivación y primeras acciones en espacios de articulación interinstitucional, como la Comisión Asesora Honoraria de Derechos Sexuales y Reproductivos, y la proyección de innovaciones en la atención a mujeres con discapacidad, salud mental y diversidad sexual.

El fortalecimiento de los equipos de salud a partir de capacitaciones, la construcción y revisión de protocolos de atención y la inclusión de metas asistenciales en problemas prevalentes de las mujeres, han sido también priorizados en este primer año de gestión.

#### **EJE 6: Contextos críticos**

Dentro de este eje, se han comprometido acciones orientadas a la articulación interinstitucional y la complementariedad de políticas, programas y recursos destinados a mujeres en situación de pobreza, indigencia, situación de calle, institucionalización y hogares monomarentales, con el objetivo de reducir brechas de desigualdad y exclusión social.

En cuanto a las acciones vinculadas a contextos críticos, casi un 86% se encuentran en proceso de implementación mientras que un 14% aún no han sido iniciadas.

Son centrales en este eje el fortalecimiento de prestaciones a mujeres de los quintiles de ingreso más sumergidos con hijas e hijos a cargo, los avances en las políticas hacia mujeres privadas de libertad, mujeres en contextos de pobreza crítica y de atención a mujeres con discapacidad y mujeres mayores en situación de abuso y/o maltrato.



El grado de avance en el desarrollo y cumplimiento de las medidas iniciales comprometidas por el gobierno es alto. Eso significa que la igualdad de género es un compromiso de Estado. Pero tengamos claro, cuando nos referimos a desigualdades estructurales, el camino es largo, los avances no son lineales, las reversiones son posibles y nos muestran que debemos seguir avanzando en el marco de la institucionalidad conferida por ley con la participación imprescindible de la ciudadanía organizada en sus diversas expresiones, sin ella, las transformaciones que queremos no serán posibles.